

2024.00040

**INFORME SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LOS CRITERIOS Y EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN PARA CURSAR LOS GRADOS D Y E DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.**

Se ha recibido para informe el referido proyecto de Orden, solicitado por la Secretaria General Técnica de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. La petición especifica que se ha acordado la *aplicación de la tramitación de urgencia* al procedimiento de elaboración normativa.

**I.-COMPETENCIA.**

El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, y del artículo 8.2.1) del Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

**II.- CONSIDERACIONES GENERALES.**

**Primera.- Sobre el proyecto y su marco jurídico.**

Junto al proyecto de Orden se remiten tres documentos; se trata de la memoria justificativa, de la memoria sobre el cumplimiento de los principios de buena regulación, y de la memoria económica; los tres documentos han sido suscritos el 3 de abril de 2024 por la persona titular de la Dirección General de Formación Profesional de la citada Consejería.

El proyecto de Orden -que figura como '*Borrador\_1\_Orden de admisión\_FPA\_24*'- está compuesto por 73 artículos, once disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales.

**Segunda.- Contenido mínimo de la memoria de cumplimiento de los principios de buena regulación.**

El artículo 7.2 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, exige que la memoria de cumplimiento de los principios de buena regulación de los proyectos reglamentarios tenga un contenido mínimo.



FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 1/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



A la vista de la memoria de adecuación del proyecto a estos principios de buena regulación, se observa que no se abordan, o no se analizan adecuadamente, las siguientes letras del mencionado artículo 7.2:

**Letra “f):** *un estudio de valoración de las cargas administrativas derivadas de la norma, justificando su necesidad y evitando la imposición de cargas innecesarias o accesorias”.*

Del literal del artículo 7.2.f) se deduce que el estudio de cargas administrativas requiere:

- 1 La identificación de todas las cargas existentes en el proyecto, independientemente de la necesidad de su imposición.
- 2 Justificación de la existencia de estas cargas.
- 3 Detección de las cargas no justificadas para evitar su imposición.

Sin embargo, la memoria sobre el cumplimiento de los principios de buena regulación de 3 de abril de 2024 se limita a afirmar que *“tras el estudio de la valoración de las cargas administrativas derivadas del Proyecto de Orden por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y matriculación para cursar grados D y E del Sistema de Formación Profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma de Andalucía, resulta imprescindible para la ciudadanía interesada aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de aquellos requisitos exigidos para cursar las enseñanzas de formación profesional y, en su caso, el recibo de la justificación del abono de los precios públicos. En este sentido, la implantación de la norma objeto de la presente memoria, evitando cargas administrativas innecesarias, supone un aumento de las cargas administrativas para la ciudadanía, dado que se constituirá en la futura norma reguladora de los procedimientos de admisión y matriculación en formación profesional.”*

Esta afirmación no viene precedida de una enumeración de cargas ni su correspondiente análisis, por lo que se considera que la valoración de cargas administrativas es insuficiente.

**Letra “g):** *cuando se regule un procedimiento administrativo, se expondrán los factores tenidos en cuenta para fijar su plazo máximo de duración, así como una previsión de su impacto organizativo y de los recursos de personal para su óptima gestión”.*

En la referida memoria no se han descrito los factores tenidos en cuenta para fijar el plazo máximo de duración de determinados procedimientos regulados en el proyecto de Orden. Estos supuestos serán analizados en el siguiente apartado del presente informe.

#### **Tercera.- Consejería competente en la materia.**

Debemos advertir que a lo largo del proyecto de Orden, casi en la práctica totalidad de las ocasiones en que se contempla la adopción de resoluciones y actos por parte de la Consejería competente en la materia regulada por la futura Orden, se hace aludiendo a “la Consejería con competencias en materia de educación” -baste con citar algunos de estos artículos: 2; 3; 4; 8; 9; 10; 18, entre otros muchos-, siendo solo en una ocasión cuando, por el contrario, se alude a “la Consejería con competencias en materia de formación profesional”, lo que tiene lugar en la disposición adicional novena.

Debe revisarse el texto para asegurar la corrección de todas estas previsiones.

FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 2/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



### III.- CONSIDERACIONES PARTICULARES.

A la vista del texto del proyecto se exponen las siguientes consideraciones particulares:

#### **Artículo 3. Información relativa al proceso de admisión.**

A tenor del apartado tercero, la Dirección General competente en materia de formación profesional “publicará el calendario de escolarización de cada año mediante Resolución, al menos, con treinta días de antelación al inicio del procedimiento”.

Para reforzar la seguridad jurídica debería especificarse donde tendrá lugar esta publicación.

Esta consideración la extendemos al resto de preceptos que, contemplando medidas similares, no precisan el medio o lugar donde tendrá lugar la correspondiente *publicación*; así sucede, entre otros, en el artículo 9.1º respecto de otro tipo de *publicación*.

#### **Artículo 9. Servicio complementario de transporte escolar.**

Dispone el apartado segundo que el alumnado que sea propuesto para su incorporación a un ciclo formativo de grado básico, recibirá junto al consejo orientador, un documento de comunicación de la vinculación, “redactado según el *modelo del Anexo XXVII*” de la Orden, en el que se relacionará la oferta de ciclos formativos de grado básico sostenidos con fondos públicos que le corresponde.

Son numerosos los preceptos del proyecto normativo -como, por ejemplo, el artículo 50.3º- que aluden a diferentes *anexos* que formarían parte de la futura Orden (además, la disposición final primera faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profesional para modificar los anexos de la Orden). Sin embargo, el texto remitido para informe carece de anexos.

A este respecto, ha de tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 12 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, en materia de la normalización e inscripción de los formularios a utilizar por los interesados.

#### **Artículo 19. Acreditación de disponer del consejo orientador.**

El apartado segundo establece que “en el caso de personas solicitantes no procedentes del sistema educativo, el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, *podrá a petición propia de la persona solicitante, o en caso de menores de edad, junto con los padres, madres o tutores legales, su incorporación* a un ciclo formativo de grado básico (...)”.

Parece necesario modificar su redacción para que alcance pleno sentido, ya que parece estar incompleta.

Existen otros preceptos cuya redacción también parece necesitar de una mejora al existir algún tipo de defecto, que le resta sentido, pudiendo referir el artículo 36 cuando en su inicio dispone que “cuando no existan plazas escolares suficientes para atender todas las solicitudes, en la admisión de las personas solicitantes *se priorizará criterio de edad y último curso* en el que se encontraran matriculados y hubiera cursado completo, de forma previa a realizar la solicitud, según el siguiente orden (...)”.

Además, son varias las erratas existentes a lo largo del texto articulado (alguna de las cuales puede tener incidencia real sobre el alcance de su contenido, como expondremos más adelante), debiendo realizarse una revisión del mismo.

#### **Artículo 21. Acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.**

1. Comienza el precepto determinando que a efectos de acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento recogida en su artículo 5.5, “las personas solicitantes *presentarán la certificación* de estar incluidas con esta condición en el Registro del Deporte de Rendimiento de Andalucía a

FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 3/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



que se refiere el artículo 15 del Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía”, así como que esta certificación podrá ser sustituida por la referencia al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el que se incluya a la persona interesada en la relación de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento.

Sin embargo, el apartado tercero dispone que a efectos de la acreditación de las circunstancias anteriores, “la Consejería competente en materia de educación *recabará la información necesaria de los registros administrativos correspondientes*, salvo que las personas solicitantes se opusieran a ello, en cuyo caso deberán aportar la documentación referida en los apartados 1 o 2 de este artículo”.

Expuesto lo anterior, instamos a que se modifique el contenido del precepto para que, en su lugar, pase a ajustarse a lo que establecen muchos otros artículos del proyecto al regular la acreditación de diversos requisitos y circunstancias; estos otros artículos -que entendemos correctos- comienzan estableciendo qué requisito o circunstancia ha de quedar acreditado en el procedimiento en cuestión, para a continuación prever que será la Consejería competente en materia de educación la que “recabará la información necesaria de los registros administrativos competentes”, y después añade que todo ello será así, salvo que la persona interesada se oponga, en cuyo caso deberá aportar la documentación acreditativa (a título de ejemplo, nos remitimos al artículo 18.3º).

De este otro modo, se evitarían posibles confusiones a los interesados, porque podrían entender que la Orden les obliga a presentar esta documentación acreditativa -en el caso del artículo 21, la de ser deportista de alto rendimiento o de alto nivel-, lo que no se ajustaría a las prescripciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, máxime cuando es una documentación que ha sido *elaborada* por la propia Administración de la Junta de Andalucía.

Esta consideración la extendemos al resto de preceptos que contienen una regulación idéntica o similar a la analizada del artículo 21.

2. El apartado cuarto prescribe que a los efectos de acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento para personas procedentes de otras Comunidades Autónomas, las personas solicitantes presentarán certificación del dictamen emitido por el órgano público competente.

Entendemos que debe modificarse esta redacción para que se ajuste a lo que dispone el artículo 28.2º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: “los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o *hayan sido elaborados por cualquier otra Administración*. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello”.

## **Artículo 22. Acreditación de la condición de discapacidad.**

Establece el precepto que a efectos de acreditación de la condición de discapacidad recogida en el artículo 5.4 del proyecto, el alumno que se encuentre en esta situación “podrá *autorizar* a la Consejería competente en materia de educación, en el modelo de solicitud de admisión, para recabar la información necesaria a la Consejería competente en la materia”.

Respecto de la “autorización” o *consentimiento expreso* de los interesados para que el órgano gestor pueda recabar datos o documentos que ya se encuentran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o que han sido elaborados por cualquier otra Administración, de nuevo hemos de remitirnos a lo prescrito por el artículo 28.2º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 4/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



*“Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello”.*

Esta consideración la extendemos al resto de preceptos que contienen una regulación idéntica o similar a la analizada en el presente. Entre otros, el artículo 29 relativo al certificado de estar empadronado en un municipio de Andalucía, y el artículo 72.7º respecto del traslado de matrícula de alumnos con discapacidad.

Lo anterior lo expresamos sin perjuicio de que para alguna materia específica, la normativa sectorial aplicable pudiera exigir expresamente que esta acción de recabar o consultar (por parte de la Administración) necesita de la *previa y expresa autorización o consentimiento* del interesado.

#### **Artículo 23. Acreditación de la edad de la persona solicitante.**

Instamos a que se modifique la expresión “copia *autenticada*” por otra más adecuada. En este sentido, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, regula las “copias *auténticas*” de documentos públicos administrativos o privados, disponiendo que “las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales” (artículo 27).

No es la única ocasión en la que el proyecto utiliza la expresión “copia *autenticada*”, debiendo procederse a su revisión.

#### **Artículo 24. Acreditación de la condición de trabajador o trabajadora y de la experiencia laboral.**

La letra b) del apartado segundo hace referencia a la “copia *sellada* por el Ayuntamiento de la declaración responsable de la declaración responsable o comunicación *previa* correspondiente presentada ante el mismo”.

Debe modificarse su redacción, no solo porque la segunda figura jurídica está regulada legalmente bajo la denominación de “comunicación” -no de “comunicación *previa*” (artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, y artículo 27 y siguientes del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero)-, sino también porque la expresión copia “sellada” forma parte de una realidad que no exactamente la actual, por cuanto todos los interesados tienen el derecho de presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones a través de un registro electrónico, en el que no existirá propiamente un *sello* (artículo 21 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre).

#### **Artículo 29. Acreditación de la condición de andaluz o andaluza.**

Dispone el apartado segundo que la condición de andaluz en el exterior “se acreditará mediante la presentación de una copia autenticada de la Tarjeta de Andaluz o Andaluza en el Exterior” regulada en el Decreto 303/2011, de 11 de octubre, por el que se crea y regula la Tarjeta de Andaluz o Andaluza en el Exterior.

De nuevo hemos de remitirnos a lo establecido por el artículo 28.2º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre cuando prescribe que “los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o *hayan sido elaborados por cualquier otra Administración*”.

En este caso, se trata de una ‘tarjeta’ que es expedida por la propia Administración de la Junta de Andalucía, según se deriva del mencionado Decreto.

FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 5/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



### **Artículo 37. Criterios de prioridad para la admisión del alumnado en primer curso de ciclos formativos de grado medio en régimen ordinario.**

El apartado segundo establece cuatro supuestos en relación con el orden de prioridad para la admisión del alumnado, y en los cuatro se alude a “personas solicitantes que *presenten* el título de (...)”.

Si, como entendemos, la expresión ‘presenten’ se utiliza como sinónimo de ‘ostenten’, entendemos más apropiado esta última, para evitar cualquier duda con la obligación de *presentar o aportar* el referido título.

Esta observación debe entenderse realizada al resto de supuestos en los que el proyecto utiliza esta expresión en contextos idénticos al ahora analizado.

### **Artículo 43. Criterios de desempate.**

Su letra b) finaliza disponiendo que en la convocatoria del sorteo que se utilizaría para dirimir empates se publicará el lugar, día y hora, al menos, con dos días hábiles de antelación a su celebración, “en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de educación”, y añade que el sorteo se realizará con anterioridad a la primera adjudicación de puestos escolares en la sede de dicha Consejería y “su resultado se hará público en la citada sede electrónica”.

Hay más preceptos en el proyecto que se refieren a *la sede electrónica de la Consejería competente en materia de educación*, refiriéndose también a ella la disposición transitoria segunda.

Al respecto, hemos de traer a colación el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por cuanto ha efectuado un cambio sustantivo en esta materia, modificando diversos preceptos del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre; nos referimos a los artículos de este Decreto que contemplaban la posible creación de las “sedes electrónicas de las Consejerías”, previsión que ya no figura en el reglamento.

El preámbulo del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero trata este cambio, disponiendo lo siguiente (subrayamos los aspectos más destacables a estos efectos):

*“(...) el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, estableció la regulación de las sedes electrónicas en nuestra Administración, estableciendo una tipología de posibles sedes electrónicas: Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, Sedes electrónicas de cada Consejería, Sedes electrónicas derivadas y Sedes electrónicas compartidas, y dispuso la obligatoriedad de que cada Consejería cree su propia sede electrónica.*

*La sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía se creó mediante la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Sin embargo, no se han creado las sedes electrónicas de cada Consejería, ya que finalmente no se consideran necesarias. La minimización del número de sedes electrónicas contribuye decisivamente a homogeneizar la relación con la ciudadanía, dar una visión unificada de nuestra Administración a la misma, facilitar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y cumplir las obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía para su funcionamiento electrónico, como garantía de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica, bajo un paradigma de organización y aprovechamiento racional de los recursos.*

*Atendiendo a todo lo anterior, se modifica el articulado del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, para suprimir el concepto de sede electrónica de una Consejería, manteniéndose la posibilidad de crear sedes electrónicas derivadas, conforme a criterios de especialización, que lo serán respecto de la sede electrónica general, así como sedes compartidas en el marco de iniciativas de colaboración con otras Administraciones Públicas”.*

En consecuencia, debe procederse a introducir los correspondientes cambios en el proyecto de Orden.

FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 6/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



#### **Artículo 46. Simultaneidad de solicitudes.**

El apartado segundo establece que cuando en el mismo procedimiento de admisión un interesado presente más de una solicitud, “se reconocerá como válida la última presentada dentro de plazo quedando *desestimada* cualquier solicitud anterior”.

Estimamos más correcto prever que dichas solicitudes serán *inadmitidas*, en lugar de desestimadas.

#### **Artículo 50. Periodo y solicitudes de admisión.**

El apartado quinto determina que “el ejemplar de la solicitud se formulará *por duplicado*, utilizando para ello los modelos” previstos en el propio precepto. Sin embargo, el siguiente apartado indica que la vía electrónica es la preferente para que los interesados presenten la solicitud, si bien permite que puedan presentarse por los demás medios recogidos en el artículo 16.4º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Así pues, en el supuesto de que un interesado opte por presentar electrónicamente la solicitud, no se entiende que ésta se tenga que *formular por duplicado* (tampoco en el supuesto de que opte por presentarla de manera presencial).

Salvo que exista una causa suficiente que lo justifique -la cual tendría que figurar en la memoria de cumplimiento de los principios de buena regulación, en el epígrafe de la identificación y valoración de las cargas administrativas que la futura norma impone a los destinatarios-, instamos a que se suprima esta previsión, lo que igualmente habría que realizar en los demás preceptos que recogen esta previsión sobre otras solicitudes (artículos 55, 59 y 66, entre otros).

#### **Artículo 51. Procedimiento de admisión.**

1. El apartado primero dispone que, en el plazo máximo de cuatro días hábiles desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de admisión, la dirección de cada centro docente elaborará la relación *provisional de personas solicitantes*, estableciendo que esta relación se “publicará en el tablón de anuncios del centro docente”.

Su segundo apartado añade que durante un período máximo de dos días hábiles, a partir de la publicación de la relación provisional de personas solicitantes, se procederá a dar trámite de audiencia por parte de la dirección en los centros docentes.

Siendo así, podría resultar incongruente que cuando este mismo precepto dispone que la relación provisional de personas solicitantes *estará disponible en dicho plazo la consulta personalizada para personas solicitantes en la Secretaría Virtual de centros* de la Consejería competente en materia de educación, añadida que ésta “servirá de notificación a las personas interesadas”.

Expresamos lo anterior porque parecería que se trataría de una fase procedimental en la que no existirán notificaciones, porque será la *publicación en el tablón* de anuncios del centro la que surta efectos jurídicos, entre otros el referente al plazo de audiencia, en el que los interesados podrían presentar alegaciones y, en su caso, documentos en defensa de sus pretensiones.

FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 7/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





Por ello nos preguntamos qué efectos en materia de notificaciones puede surtir que el interesado acceda a la *consulta personalizada a través de la secretaría virtual* de centros, cuando no hay un plazo individualizado para formular alegaciones, al tratarse de un plazo común o único para todos los interesados, que se computa desde el día siguiente a que se *publique* la relación provisional.

Sea como exponemos, o de otro modo, deben realizarse las modificaciones que aseguren la corrección y la coherencia en esta materia.

2. El apartado sexto regula la adjudicación de plazas, conteniendo unas previsiones casi idénticas a las que hemos analizado del apartado primero, motivo por el que extendemos nuestras consideraciones sobre él (lo que realizamos igualmente sobre los diversos preceptos del proyecto que también lo recogen).

Ambas previsiones son posteriormente reiteradas en otros preceptos respecto de diferentes procedimientos de admisión, como por ejemplo sucede en el artículo 56, así como en la disposición adicional sexta (que después de disponer que *las publicaciones* a las que se hace referencia la Orden podrán consultarse de forma personalizada a través del portal web de la Consejería competente en materia de educación, así como *la oferta educativa* sostenida con fondos públicos con indicación de las plazas escolares ofertadas, añade “esta última a efectos meramente informativos”).

3. El apartado segundo regula el trámite de audiencia en el que los interesados podrán presentar alegaciones a la relación provisional de solicitantes; hemos de destacar que su inciso final está redactado de un modo que no dejaría claro si la Orden estaría imponiendo a los interesados que estas alegaciones *únicamente se podrán presentar por medios electrónicos* (no presencialmente, como sí prevé para las solicitudes).

Nos referimos al inciso que dispone que “a tales efectos, se habilitará el trámite de alegación a la relación provisional de personas solicitantes a través de la Secretaría Virtual de los centros docentes andaluces”.

A nuestro parecer, no parecería lógico que si el proyecto normativo permite que las solicitudes se puedan presentar presencialmente, posteriormente sí impusiera que las alegaciones en el trámite de audiencia únicamente se presenten electrónicamente.

En todo caso, esta *posible* imposición de relacionarse electrónicamente exigiría que se dieran las circunstancias del artículo 14.3º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (han de tratarse de “colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”), y que se recoja expresamente en la memoria de cumplimiento de los principios de buena regulación.

### **Artículo 53. Listas de espera.**

1. El apartado cuarto dispone que “la información de las nuevas plazas asignadas se comunicará a los centros docentes y a las personas interesadas a través de los sistemas de información de la Consejería competente en materia de educación”, añadiendo el apartado quinto que “la persona solicitante que haya obtenido plaza escolar por el procedimiento de lista de espera deberá formalizar la anulación de la matrícula mediante el trámite habilitado en la Secretaría Virtual de los centros andaluces, si estuviera matriculada en otra oferta, y formalizar la matrícula en el centro docente asignado *en un plazo de 48 horas*, a partir de que se produzca la notificación recogida en el apartado anterior”.

FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 8/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





Aunque no se indica de manera expresa, de lo anterior parecería desprenderse que se está regulando la práctica de notificaciones que únicamente tendrían lugar *de manera electrónica* (estas previsiones se reiteran en más preceptos del proyecto, como entre otros son los artículos 58 y 69). Al respecto, nos remitimos a lo expresado al analizar el artículo 51.2º.

2. Por otra parte, debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre al regular el cómputo de los plazos expresados en horas:

*“Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.*

*Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días”.*

Esta observación debe entenderse formulada al resto de preceptos que contienen esta misma previsión.

#### **Artículo 57. Opciones del alumnado y matriculación.**

Hemos de advertir que el contenido del apartado segundo parece estar reiterado en el apartado cuarto; de ser así deben realizarse los correspondientes cambios.

#### **Artículo 58. Listas de espera.**

El contenido del apartado segundo resulta confuso, debiendo modificarse para que alcance un sentido claro e inequívoco:

*“La asignación de plazas a las personas solicitantes que se encuentren en listas de espera tras la adjudicación del período regular comenzará sin haber superado el 7 de septiembre de cada año y finalizará el 15 de octubre o en la fecha máxima indicada por cada centro en la publicación de la oferta, o el primer día hábil a partir de esa fecha”.*

#### **Artículo 62. Periodo y solicitudes de admisión.**

El apartado tercero dispone que “para los cursos de especialización que se inician en otro momento del año diferente al mes de septiembre, los procedimientos de presentación de solicitudes, admisión, matriculación y listas de espera se realizarán durante un período de cuarenta días hábiles previos a la fecha de comienzo del curso”.

Sería conveniente modificar los términos utilizados en el mismo, y en su lugar emplear una redacción más apropiada que “*procedimientos de presentación de solicitudes*”, toda vez que *la presentación de solicitudes* por parte de los interesados no ostenta la naturaleza propia de un *procedimiento* administrativo.

Por otra parte, proponemos que en lugar “(...) *que se inician en otro momento del año diferente al mes de septiembre*”, se utilice una expresión más breve y sencilla, como podría ser “(...) *que no se inician en el mes de septiembre*”, o similar.

#### **Artículo 70. Matriculación del alumnado en el mismo centro docente.**

FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 9/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



1. Si, como entendemos, lo exigido por el apartado primero es que para aplicar sus previsiones bastará con que el alumno se encuentre en “alguna” (una) de las circunstancias que relaciona, debería modificarse su redacción para que en lugar de “algunas” disponga “alguna”.

2. El apartado tercero, en su segundo párrafo, establece que el alumnado "se podrá añadir" materias.

En el supuesto de que lo regulado sea una *ampliación* de la matrícula -*extensión* de la matrícula (este segundo término figura en el artículo 71.3º del propio proyecto)-, debería realizarse el correspondiente cambio.

#### **Artículo 71. Matriculación del alumnado en otros módulos profesionales.**

El apartado segundo dispone que al objeto de dar respuesta a las personas que estén en disposición de obtener un título de formación profesional sin haber podido realizar la matrícula del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo entre el 25 y el 30 de junio ni antes del 15 de octubre de cada año, “la Delegación Territorial competente en materia de educación podrá *autorizar*, de oficio o previa petición del centro docente, la matriculación” en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo a los únicos efectos de exención del mismo.

El precepto no determina el *plazo máximo* para que la Delegación Territorial adopte y notifique la resolución de este procedimiento autorizatorio. Como es sabido, el artículo 21.3º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, prescribe que cuando la norma reguladora de un procedimiento no fije el plazo máximo, éste será de tres meses.

Debe procederse a valorar si el plazo de tres meses es excesivo, en cuyo caso debe establecerse en la Orden un plazo que sea razonable y adecuado a la entidad del mismo (procedimiento relacionado con la matriculación de alumnos). En todo caso, en la memoria de cumplimiento de los principios de buena regulación debe incorporarse el análisis exigido sobre este particular por el artículo 7 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, para que en la misma figuren *los factores tenidos en cuenta para fijar su plazo máximo de duración*.

Estas consideraciones las extendemos al resto de casos en que el proyecto contempla autorizaciones (entre otros, en el artículo 72) y otro tipo de procedimientos (como tiene lugar en el siguiente precepto).

#### **Artículo 73. Procedimiento para la solicitud de traslado de matrícula.**

1. El precepto, en un primer momento, parece contemplar que la competencia para resolver la solicitud de traslado de matrícula puede corresponder bien a la *dirección del centro docente de destino*, bien a la correspondiente Delegación Territorial, o bien a la Dirección General competente en materia de formación profesional (así se derivaría de los apartados 1 y 4).

Sin embargo, en sus siguientes apartados el precepto:

- No especifica cuales son los criterios o circunstancias que determinan que la competencia sea del centro docente, de la Delegación Territorial o de la Dirección General, motivo por el que debe modificarse el precepto para incorporar los.

FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 10/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



- No regula la resolución *de la Dirección General*, sino únicamente la del centro docente, y la resolución de la Delegación Territorial (apartados 3 y 5, respectivamente), debiendo incorporar los cambios que den coherencia y aseguren la íntegra regulación de esta materia.

2. Cuando su primer apartado se refiere a la solicitud que el interesado ha de presentar para instar el traslado de matrícula, dispone que la solicitud se presentará “*adjuntando la documentación acreditativa* de las circunstancias que motivan el traslado”.

Deben incorporarse al mismo unas previsiones similares a las contenidas en los demás artículos del proyecto, de modo que se observe el derecho de los interesados a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, derecho al que nos hemos referido en el presente informe en diversas ocasiones.

**Disposición adicional novena. Convalidación de módulos profesionales por unidades de competencia acreditadas en virtud de convocatorias realizadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía de procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.**

Dispone que “(...) la Consejería con competencias en materia de formación profesional, en el sistema educativo, *podrá generar* un procedimiento de matriculación en determinados títulos de Técnico y Técnico Superior, a los únicos efectos de convalidación de módulos profesionales del título por unidades de competencia acreditadas en el procedimiento”.

Proponemos que en lugar de prever que la Consejería podrá “generar” un procedimiento administrativo de matriculación de determinados títulos, utilice otro verbo más apropiado para el contexto en que se encuentra (quizá “iniciar” u otro similar).

EL SECRETARIO GENERAL PARA LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Arturo E. Domínguez Fernández

FIRMADO POR	ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ FERNANDEZ	21/05/2024	PÁGINA 11/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmCUJ6H7C6MLZ9DA2YMEAUWECNX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	